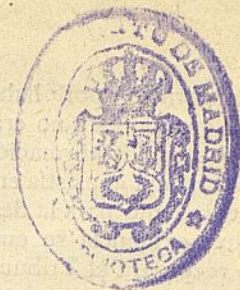


F-8919

DISCURSO PRONUNCIADO

POR



EL ILMO. SR. D. JOAQUÍN MARTÓN Y GAVÍN

FISCAL DE LA AUDIENCIA DE MADRID

para fundamentar la retirada de la acusación, hasta entonces sostenida, en el proceso seguido contra dieciocho Señores Concejales del Ayuntamiento de Madrid, por haber votado la adjudicación definitiva del servicio de limpiezas.

TERCERA SESIÓN

(22 de Julio de 1897.)

Abierta á las ocho y cuarenta minutos, y leído el escrito de conclusiones definitivas del Sr. Fiscal, dijo

El Sr. Presidente: El Sr. Fiscal tiene la palabra para sostener sus conclusiones.

El Sr. Fiscal: Practicadas en tiempo oportuno las pruebas solicitadas por las partes, y en ocasión debida estimadas pertinentes por la Sala, llegábase ayer al momento solemnisimo en que el digno Sr. Presidente de esta Sala, cumpliendo con un deber expreso de la ley, preguntaba á las partes, porque así la ley lo ordena, si mantenían ó modificaban sus conclusiones. En aquel momento, y recogida la impresión del conjunto y de los detalles de todo género de las pruebas testificales, documentales y periciales aportadas al acto del juicio, ofrecíase á la consideración del Ministerio Fiscal dos puntos de vista importantísimos, que eran como dos problemas delicados, por no calificarlos de otra manera.

Primer problema que se ofrecía al Ministerio Fiscal: debía mantener, modificar ó retirar sus conclusiones provisionales?

He aquí la cuestión que pudiéramos llamar previa.

Declaro solemnemente que no tuve vacilación de ningún género, relativamente á la resolución de este primer problema. Por razones especialísimas de régimen interior de esta Casa, tuve necesidad de enterarme y de estudiar detenidamente este proceso, ante la eventualidad de que la celebración del juicio se señalara para el periodo de vacaciones; y, en efecto, desde el momento que consagré mi pobre inteligencia al estudio de los antecedentes de este proceso, me penetré de que no podía en justicia, al menos por mí entendida y explicada, prosperar de modo alguno la acusación que en las conclusiones provisionales se había formulado.

Claro y consiguiente es que después, en el acto de este juicio, delante del cúmulo y riqueza de probanzas documentales y testificales que han pasado por delante de nosotros, mi ánimo se confirmó más y más, mi conciencia se tranquilizó por completo y los imperios de mi razón se impusieron para que yo, sin vacilación de ningún género, en el instante mismo en que el Sr. Presidente formuló su pregunta, contestara de manera categórica y rotunda «que el Fiscal no podía mantener la acusación, y, en su virtud, la retiraba, pidiendo la absolución de los procesados.»

Esto entendí en conciencia, esto me dictaba la razón y esto es lo que sostengo hoy aquí, con completo convencimiento. No de otro modo entiendo yo que este organismo Fiscal, por índole y por naturaleza batallador á todas horas, frente á frente de Letrados distinguidos, pueda mantener su prestigio, sino teniendo formado un concepto á la moderna de lo que es y debe ser el Ministerio público.

No deben constituir los Fiscales un organismo de terror y de sistemática acusación, sino que, por el contrario, lo mismo debe formularse una acusación imponente y severa, por terribles que sean sus consecuencias, que brotar palabras de defensa, proclamando la inocencia, cuando crea el representante de la ley que realmente tiene frente á sí personas irresponsables, y que es imposible, en razón y en derecho, pedir penas contra los procesados. (*Muy bien, muy bien.*)

Y debió manifestar al Tribunal otra cosa: si este problema de fondo no preocupó mi ánimo ni un instante; si tuve vacilaciones relativamente á la postura que debía adoptar, á la conducta que debía seguir en este acto el Ministerio Fiscal, una vez retirada la acusación y penetrado de la inocencia de los dieciocho procesados, Concejales hasta poco ha del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuál era la conducta discreta y correcta que debía seguir el Ministerio Fiscal?

Después de un proceso tan importante y de tal resonancia, en el que han concurrido las circunstancias de que luego me ocuparé; en el que se levantaban, como especie de esfinge, unas conclusiones provisionales abrumadoras formuladas por un dignísimo é ilustrado compañero mío,

funcionario respetado por todos y por mí, ¿podía el Fiscal de S. M., que ha venido en sustitución suya á sostener un criterio frente á frente del sostenido por el señor Teniente Fiscal de la Audiencia de Madrid limitarse á pronunciar seis ú ocho palabras sacramentales, para manifestar al Sr. Presidente «que retiraba la acusación», permaneciendo silencioso ante los problemas de índole administrativa y técnica que aquí se agitan?

¿Era este papel airoso para el Fiscal de S. M. y aun para el funcionario antes indicado? Esto es lo que dudé. Ya sabía que, callando, prestaba un gran servicio, cuando menos el de evitar á todos las molestias de escucharme; pero dominaron en mi ánimo otras consideraciones, y pedí la palabra siquiera fuese al objeto de sintetizar los razonamientos y motivos que tiene este Ministerio para retirar su acusación, y para justificar las variantes posteriores á las referidas conclusiones provisionales.

Era, en efecto, delicada mi situación: yo no sé si el digno funcionario que formuló las conclusiones provisionales, el Sr. Teniente Fiscal que inspeccionó durante el sumario este proceso, si hubiese ocupado este puesto y presenciado el resultado de las pruebas practicadas, mantendría su acusación escrita. Sé cuánto vale, y me inclino á creer que el mismo criterio y el propio convencimiento que en mí han producido las pruebas efectuadas, se habrían producido y desarrollado en el ánimo de aquel rectísimo funcionario, siendo, pues, idéntico el resultado.

Pero sea como quiera, mi situación, al fin y al cabo, era un tanto especial, puesto que habían de aparecer dos criterios completamente antitéticos y opuestos; el uno, acusatorio, y el otro, absolutorio; el uno, según el cual, aparecían elementos de delito, el otro, que no encontraba esos elementos, ni dentro de los datos provisionales ni mucho menos dentro de las pruebas del juicio, con la particularidad de que el proceso se ha enriquecido con pruebas documentales que no pudo conocer el funcionario que formuló las conclusiones provisionales.

Yo entiendo, repito, que la conducta del Ministerio Fiscal se debe ajustar en el día de hoy á un conjunto de altísimas consideraciones, y que tratándose de Concejales que han constituido el Ayuntamiento de Madrid, deben razonarse las conclusiones definitivas, siquiera sea por respeto á la opinión, apoderada del asunto desde los primeros instantes, y atenta siempre á sus incidencias y vicisitudes.

Proceso de esta importancia y publicidad, bien merece que, ante criterios fiscales diversos, se concreten los hechos, se haga verídica referencia de lo ocurrido, se analicen las cuestiones planteadas y se expliquen los fundamentos en que descansan las conclusiones definitivas, á fin de que, cuantos vengan aquí sin prejuicios, sin odios ni afectos, deseando asociarse á la administración de justicia, buscando la verdad sin apasionamientos, sepan á qué atenerse y oigan la voz imparcial del Ministerio Fiscal, que no tiene prevenciones ni siente malquerencias contra persona alguna. (*Muy bien, muy bien en el público.*)

El Sr. Presidente: Están prohibidas las muestras de aprobación: ruego al público que guarde silencio.

El Sr. Fiscal: Y pesó en mi ánimo, además, otra consideración. El cuerpo electoral tiene, en mi concepto, perfecto derecho á saber si se equivocó al designar á los hasta hoy procesados, ó si realmente obró acertadamente al conferirles su representación; en el primer caso, para excluirlos, y en el segundo, para verles salir de este proceso con todo el lleno de merecimientos sociales que tenían al ser elegidos y capacitados para merecer de nuevo algún día la confianza de sus conciudadanos.

Habla, pues, el Ministerio fiscal, y explica y razona sus conclusiones, en respeto á la primera Corporación municipal de España, en respeto al Cuerpo electoral, en altísimo respeto á la opinión pública, para ilustrarla y tranquilizarla, para que llegue á penetrarse de cuanto, en realidad, contiene este proceso.

Podrá ser censurada esta conducta; podrá haber quien no la aplauda y á quien moleste; pero lo que nadie podrá negar es que la actitud del Ministerio fiscal en este momen-

to tiene todos los caracteres de un debate leal y noble, levantado é imparcial, determinado á impulsos de movimientos de rectitud acrisolada y en consagración de respetos sociales, que, lo mismo en la vida civil que en la jurídica, es preciso guardar, aquí y fuera de aquí, debiendo suponerse inocentes á aquellos respecto á los cuales no se probase lo contrario.

Y, finalmente; he tenido también en cuenta la altísima veneración que me inspira este sitio. Pues qué, acaso se ha dicho en la ciencia la última palabra? Acaso, porque la ley conceda esta gran soberanía, este inmenso poder al Ministerio fiscal de retirar una acusación, después de seguirse un proceso, debe encerrarse en inexplicable silencio ante una Sala de justicia, competente é ilustrada, sin procurar demostrarla que ha consagrado largas horas al estudio de la causa, é inspirarla, en esta vida de relaciones mútuas entre la Sala y el Ministerio público, aquella confianza que es necesaria para la mejor administración de justicia? No. Tal vez esto sea objeto, andando el tiempo, de modificaciones de carácter legislativo; pero, mientras vienen, yo entendía que era un deber mío, en el día de hoy, no el de hacer un discurso, sino el de presentar un cuadro sintético de las pruebas y de sus resultados, tan sintéticos, que si fuera posible me limitaría á formular una ecuación.

El objeto no es, por lo tanto, descender á la multitud de hechos pequeños que flotan en las páginas de este proceso, sino el de prescindir de todo aquello, muy abundante por cierto, que reviste el carácter de trivial y secundario, para fijar mi atención en el problema de, si el conjunto de los hechos procesales, constituye ó no el delito de prevaricación imputado; para decidir lo cual basta con recoger todo aquello que es substancial, todo aquello que es fundamental, todo aquello que, enlazado, puedan constituir elementos homogéneos y determinantes de la existencia ó inexistencia del delito de prevaricación. Esto es, pues, lo que va á hacer el Ministerio fiscal: recoger todos y cada uno de los hechos y conceptos que aparezcan como cargos, casi sin comentarios, y exponer las razones que, á su juicio, existen para que no puedan aceptarse como determinantes de aquel delito: tarea sencillísima, en medio de lo complejo del asunto de que se trata.

Comenzó esta causa por comunicados publicados en *El Imparcial* el 18 de Noviembre de 1895 y en otros días y suscriptos por el Sr. Marqués de Cabriñana. Dos solos argumentos, dos solas afirmaciones, dos solos cargos contiene el comunicado que al asunto de limpiezas se refiere.

El Sr. Marqués de Cabriñana censuró acremente á las Comisiones del Ayuntamiento que intervinieron en dicho asunto, por haber propuesto, palabras textuales, la *adjudicación sin subasta del servicio de limpiezas*. Y á esto responde el Fiscal; que jamás entendió pertinente y prosperable acusar á un organismo cualquiera, que se limitase á proponer, á emitir dictamen, que pudo aceptarse ó ser rechazado.

La buena doctrina jurídica es que, únicamente, puede acusarse á aquel que, después de apreciadas las razones del proponente, convencido ó no por ellas, decide y resuelve, ora en pro de la proposición, ora en contra de ella; y que solamente el que falla, el que concluye, es el que puede contraer responsabilidad.

Pero recordará el Tribunal que yo le dirigí unas sencillísimas preguntas al Sr. Marqués de Cabriñana: «¿Recuerda usted el artículo que suscribió, tal cual está redactado; contestándome que sí. ¿Recuerda usted haber hecho la indicada afirmación?, respondiendo afirmativamente. ¿Conoce usted el decreto de 4 de Enero de 1883, que regula y reglamenta las adjudicaciones de estos servicios municipales; obteniendo igual contestación. ¿Y recuerda usted que el artículo 36 de ese decreto dice terminantemente «que no será necesaria la subasta para la adjudicación de servicios públicos, cuando se hayan intentado dos y hayan resultado sin licitadores?» respondiendo que era cierto.»

Si pues esto es exactísimo, y si, á continuación confesó que se habían intentado *nada menos que once subastas*, ¿cómo es posible que en el comunicado determinante de la instrucción de esta causa, con notoria ligereza, se pudiera acusar á

la Corporación por haber adjudicado un servicio sin subasta, cuando ésta no era legalmente necesaria?

La segunda afirmación del comunicado del Sr. Marqués de Cabriñana consistía en que, se había exigido, como único procedimiento para la desinfección, el empleo de la creolina, en cuya exigencia se encontraba un dato de criminalidad. Pero recordará el Tribunal que el Fiscal preguntó al señor Marqués si tenía presentes las palabras de la condición 4.^a del pliego económico-administrativo, que exigía el empleo de la creolina *ó de otros agentes químicos de gran potencia*; contestando afirmativamente. Luego no hubo exactitud en la segunda afirmación y cargo del comunicante.

Por lo tanto, el Ministerio Fiscal no puede aceptar ni siquiera el origen de este proceso, al cual podemos ya denominar acéfalo, puesto que carece de base y fundamento en sus comienzos.

Y no me ocupo de otras dos insignificantes afirmaciones que adicionaba el Sr. Marqués de Cabriñana en su comunicado, porque realmente parecen destinadas á exornar y aderezar el artículo, sin que afecten á lo esencial del asunto.

Y ahora deberé ocuparme del escrito de conclusiones provisionales. He de examinarle con la discreción conveniente, tratándose de asuntos de esta índole. En ese escrito hay dos conceptos que sintetizan el criterio severo que en él predominó. Se funda el uno en el hecho de que, á los seis días de pasarse todos los antecedentes á los Sres. Aguilera y Ginard de la Rosa, presentaron éstos el pliego de condiciones facultativas para la subasta, con noventa y nueve condiciones, revelando conocimientos imposibles de adquirir en tan pocos días.

He aquí el hecho que impresionó al Sr. Teniente Fiscal, y determinó su escrito de conclusiones provisionales.

El hecho era entonces cierto; pero lo es también que esos seis días fueron el tiempo invertido en la labor material de redactar el pliego de condiciones, después de un prolijo estudio, de un examen detenidísimo durante varios meses.

¿Acaso carecía de antecedentes el asunto cuando pasó á los ponentes, para que pudiera despertar sospechas la labor en seis días realizada?

Todo lo contrario; los datos del proceso demuestran que, si el pliego no se hallaba redactado cuando pasó á los ponentes, estaba pensado y discutido, concebido *in capite*, y acordados todos los detalles que había de contener.

Esto es evidente de toda evidencia, para el que tiene el honor de dirigirse al Tribunal en este momento. ¿Por qué? Porque la proposición de Vanden-Eynde, desde seis meses antes, había sido objeto de debates en el Ayuntamiento y de discusiones y de estudios que públicos son, y demostrados han quedado aquí. De modo, que tenemos por este lado ya seis meses de estudio y no los seis días en que definitivamente se redactaron y formularon las 99 bases del pliego facultativo.

Pero esto era poco; este servicio venía prestándose por la tática nada menos que desde el año 86; de manera que ya llevaba el Ayuntamiento ocho ó nueve años tratando de esta cuestión, bajo todos sus aspectos y con todos los incidentes que en tan largo período se promovieron.

Y hay más; en el presupuesto municipal del año 1894 á 1895, de aquel gran naufragio á que se refería ayer un procesado, no se salvó más que el proyecto de adjudicación del servicio á Vanden-Eynde, aceptándose en principio lo contenido en la 69 de las bases complementarias. Por consiguiente, no sólo tenemos el precedente del prolongado estudio y amplísima discusión, sino el de haber existido solemne acuerdo municipal que aceptaba, en principio, la adjudicación directa del servicio.

Y no hay para qué decir el efecto que produjeron en la Corporación municipal las visitas de inspección giradas, y las Memorias notabilísimas que, por consecuencia de ellas, redactaron los Sres. Dato y Aguilera llegando á ser motivo de preocupación permanente para el Ayuntamiento la absoluta necesidad de corregir los vicios señalados, para evitarse responsabilidades.

Con tales datos y elementos, ¿es posible que este Ministerio fiscal pueda acoger el hecho de que se ocupa, como indicio de que pudiera haber en el fondo de la redacción de aquel pliego de condiciones algo incorrecto é indebido, encaminado á determinados fines y á crear privilegios ó ventajas en favor de algunas personas, alejando licitadores de la subasta? El Fiscal que tiene la honra de dirigirse al Tribunal, concordando todos esos hechos, y después de explicados, no puede aceptarlos con aquella virtualidad bastante y necesaria para fundar sobre ellos una acusación de delincuencia.

Y existe otro dato contrario á toda idea de culpabilidad. En esa rica documentación á que antes me refería, que ha venido al proceso, se halla un documento notabilísimo, que merece examinarse y tenerse en cuenta.

Me refiero al informe, para el Sr. Gobernador civil emitido, por la Comisión provincial, como trámite indispensable de los varios recursos de alzada que se interpusieron ante aquella autoridad, unos, contra las condiciones 4.^a y 6.^a del pliego económico-administrativo, y otros, contra la adjudicación definitiva de la subasta; en cuyos recursos, el Jefe del Negociado que intervino en ellos, rebatiendo algunos conceptos, que por cierto adujeron también ayer los señores Ingenieros que dictaminaron, expresaba que el servicio de limpiezas, tal como por el Ayuntamiento se había establecido, se realiza en el extranjero, estando planteado en Inglaterra desde el año 1896 nada menos que en 155 poblaciones. Por consiguiente, si existen todos estos precedentes, el Fiscal de S. M. no puede atreverse á afirmar que sea un dato revelador de delito, ni siquiera inductor de malicia, el haberse invertido seis días, después de tanto examen y es-

tudio, en la material redacción del pliego de condiciones facultativo con noventa y nueve cláusulas ó artículos.

El escrito de conclusiones provisionales acogía también, como elementos determinantes de posible delincuencia, algunos conceptos vertidos por los señores peritos Ingenieros. No he de leer textualmente las bases 4.^a y 6.^a del pliego económico-administrativo, porque tengo el propósito de concretar, y porque todos las conocemos ya, sabiendo á qué se reducen; pero sí haré una ligerísima indicación al Tribunal, y es que, estos señores peritos Ingenieros ayer examinados, no son los mismos que propuso en el sumario el Sr. Teniente fiscal.

Este propuso al Juzgado que se nombrasen el Director del Instituto de Alfonso XII y un Catedrático de Química de la Escuela de Artes y Oficios, por considerar que eran los verdaderamente competentes. El Juzgado debió no entenderlo así, puesto que designó á los Presidentes de las Juntas consultivas de Caminos y de Minas, quienes, después de aceptar el encargo, no dieron informe alguno, nombrándose en su virtud á los tres Sres. Ingenieros de Caminos, Minas y Montes que ayer comparecieron ante la Sala. Y digo esto, porque yo, sin censurar de modo alguno la forma y redacción de las preguntas sometidas á su examen, declaro que me parece no revisten los términos precisos y técnicos en que debieran contenerse, para que las contestaciones de los Sres. Ingenieros resultasen, informando sobre puntos eminentemente técnicos y facultativos. Lejos de ser así, todas esas preguntas, menos una, tienen pronunciado carácter jurídico y administrativo. Y si el Fiscal es siempre respetuoso con aquellos informes técnicos y profesionales, peculiares y propios de los que atesoran conocimientos especiales y profundos, no puede aceptar como dogma todo aquello que caiga bajo la acción del derecho civil ó administrativo, en cuya materia debe tener, por sus estudios y su experiencia, competencia y conocimientos por lo menos iguales á los que puedan ostentar los Sres. Ingenieros de Caminos, Montes y Minas.

Por lo tanto, no puede aceptar el Fiscal las conclusiones de los Sres. Ingenieros como dato para sospechar criminalidad. Podrá aceptarlas, quizá, como teorías más ó menos discutibles; podrá respetar la opinión que cada cual sustente respecto á la interpretación del Real decreto de contratación de servicios públicos; pero de ninguna manera puede aceptar esas conclusiones como informe pericial, que obligue al Fiscal á seguirlas ni á considerarlas como acertadas.

Y tan verdad es esto, que los Sres. Ingenieros, al comenzar su informe ó disertación, consignaron estas palabras textuales: «Teniendo personalmente la capacidad oficial requerida para apreciar con el carácter de peritos las cuestiones de orden administrativo á que las mencionadas preguntas se refieren, emiten su dictamen unánime en los siguientes términos.» Para tratar las cuestiones de orden administrativo á que las mencionadas conclusiones se refieren, ¿era acaso procedente buscar Ingenieros? ¿Era ese el objeto de la providencia judicial? De ningún modo: el objeto fué enterarse de la sustancialidad que debía revestir como elemento informatorio, lo que es pura y exclusivamente materia de una subasta de servicios públicos; pero en cuanto á su alcance, en cuanto á su inteligencia, en cuanto á su interpretación, en cuanto á la manera de apreciarla, en cuanto á revestirla de circunstancias y condiciones de garantía, ¿cuándo, acaso, se pregunta esto mas que al que tiene un título científico en derecho administrativo? ¿De cuándo acá los Ingenieros han de ser competentes para decir si efectivamente tiene un vicio de nulidad un contrato? ¿De cuándo acá se les ha de preguntar si ese contrato tiene los caracteres de mancomunado ó de solidario?

Ha habido rebasamiento de facultades, y no toda la habilidad que fuera de desear para haber encerrado la prueba técnica en sus moldes precisos y propios, dentro de los cuales debiera haberse desarrollado en este proceso.

Justificados así los puntos de vista indicados, y hechas estas reservas, que el Fiscal tenía necesidad de consignar, debe consignarse al examen del informe de los Sres. Ingenieros, que es el que indudablemente determinó que subsistiese el procesamiento de los acusados y que se redactasen las conclusiones provisionales.

Y ya que de esto me ocupo, quiero recordar al Tribunal, para que se vea cuánto de opinable, de académico y de doctrinal hay en ese dictamen de los Ingenieros, que cuando ayer se presentó otro Sr. Ingeniero traído por las defensas, el Sr. Echegaray hizo, bajo juramento, y con la competencia que es preciso reconocerle, afirmaciones completamente antitéticas y contrarias á las contenidas en el dictamen de aquellos otros compañeros suyos. Para el señor Echegaray, es legítimo y corriente que se admitan en las subastas, además de las condiciones técnicas necesarias, todas aquellas que revistan los caracteres de condiciones de garantía para la Corporación contratante; para el señor Echegaray las condiciones 4.^a y 6.^a del pliego económico-administrativo eran la necesaria legalidad de la subasta; y la prueba de que está en lo cierto, se halla en que un docto Abogado, que vino aquí como testigo, el Sr. Ruiz Jiménez, afirmó que el espíritu que flotaba en la discusión habida en el Ayuntamiento, fué el de que las condiciones 4.^a y 6.^a, además de las taxativamente exigidas por el Decreto de 1883, constituían toda la legalidad sobre la cual había de basarse la adjudicación del servicio de limpiezas á tal ó cual licitador.

El Sr. Echegaray decía que debieran haberse rechazado los pliegos que no contuvieran la necesaria documentación, con arreglo á la condición 4.^a, y pronto van á ver los señores del Tribunal como los otros Ingenieros decían que solamente el que hubiera cumplido la condición 6.^a era quien podía ser favorecido con la adjudicación.

El Sr. Echegaray afirmaba también «que todas las condiciones que se señalan para las subastas alejan *per se*, y en principio, á una porción de gentes de la licitación, pero que esto lo llevan consigo los fines humanos, porque, es claro, añadía con sencillez admirable á la par que persuasiva, todas las condiciones limitan el círculo de licitadores. Si á mí se me exigen 30 ó 36.000 pesetas para el simple hecho de aspirar á la subasta, es evidente que, si no dispongo de ellas, no podré ir á la licitación, y aquella condición limitaría la concurrencia.»

Bajo este punto de vista, es indudable que, existiendo igualdad de condiciones entre cuantos estén en idénticas ó análogas aptitudes metálicas para constituir el depósito exigido á fin de poder aspirar á la subasta, todo aquél que no tenga el dinero suficiente queda excluido, queda colocado en situación desventajosa y se podría considerar alejado de la licitación. El hecho es cierto, pero constituye una restricción legal y necesaria, que no acusa privilegio ni ilicitud alguna.

De manera que es compatible la doctrina de la igualdad dentro de las mismas condiciones establecidas previamente por la Corporación, con la existencia de condiciones de garantía.

Y expongo estas consideraciones, para evidenciar la libertad de crítica y de apreciación que deben tener los Tribunales y el Ministerio Fiscal en esta clase de cuestiones, al objeto de estimarlas según su propio criterio, sin trabas ni limitaciones por ajenos pareceres.

Así, pues, á nadie podrá extrañar que el Fiscal una á su propio y modesto juicio, basado en el conjunto de las pruebas, aquellas autoridades y doctrinas que le parezcan más acertadas y admisibles.

Y dicho esto, voy rápidamente á expresar mis discordancias con las conclusiones de los Sres. Ingenieros. La primera afirmación de éstos, puede darse ya por rebatida con lo que queda expuesto, ó sea con los juicios emitidos por el otro Ingeniero, Sr. Echegaray.

Sostienen aquéllos, que no se pueden exigir á los licitadores en las subastas más garantías para la adjudicación del contrato que la consignación del depósito, la cédula personal y la fianza definitiva después.

Cierto que así es, para el mero hecho ó acto preliminar de poder ser considerado licitador; pero no puede desconocerse que para lo subsiguiente, para integrar y completar la personalidad del licitador, convirtiéndolo en rematante, con todas las cualidades económicas y técnicas que se requieran en cada caso para desempeñar un servicio ó cumplir un contrato, ya se necesitan y se pueden imponer las condiciones especiales que el Ayuntamiento estime oportunas, como sucedió con las 4.^a y 6.^a del pliego económico administrativo.

Para los Sres. Ingenieros, según su conclusión, «todos los ciudadanos, presentando la cédula personal y el resguardo de la fianza, pueden, en general, pretender y obtener la adjudicación de obras ó servicios públicos, si tienen la capacidad civil ó no la han perdido para el caso.»

El Fiscal no puede estar conforme con esta doctrina: *Todos los ciudadanos*, menos los que no tuviesen las treinta y seis mil pesetas exigidas, pues sin ellas no se podía acudir á la subasta.

Por consiguiente, esa afirmación de los tres Sres. Ingenieros no puede aceptarla el Ministerio Fiscal tal como está expuesta. No basta ser ciudadano, no basta conservar capacidad civil, no basta tener cédula de vecindad, sino que es preciso también el previo depósito de una cantidad determinada y observar y cumplir las condiciones de garantía que imponga la Corporación que contrata. Y tan cierto es esto, que en el preámbulo del Real decreto de 1883, suscripto por el ya difunto D. Venancio González, se proclaman dos conceptos: el uno, que en ese Real decreto se recogieron doctrinas diversas de las que rigieron en un período de treinta años, es decir, de aquellas invocadas en el ya antiguo decreto del año 1852; y el otro, que el espíritu que informaba este nuevo Real decreto sobre subastas, era el dar mayor libertad á las Corporaciones para contratar y adicionar á las condiciones taxativamente marcadas en dicho Real decreto, todas aquellas otras que, en concepto de las Corporaciones debieran acordarse, bien personales ó de garantía, según lo que se estimasen mejor y conducente para el buen servicio contratado: añadiendo que esto obedecía al propósito descentralizador de que participaba el Gobierno de S. M.

Por consiguiente, con ese mismo Real decreto se demuestra de una manera clara y patente, que constituyó un avance en la vida administrativa, inspirado en la tendencia de tolerar á las Corporaciones mayor latitud en la consignación de condiciones que creyesen convenientes para las subastas de los servicios á su cargo. Esto es evidente de toda evidencia.

No quiero molestar al Tribunal; pero sí he de decir que las condiciones que el Real decreto califica de necesarias, y con cuya palabra no excluye todas aquellas otras que sean potestativas y voluntarias en las Corporaciones populares que contratan, las define y precisa, porque necesariamente tienen que consignarse en las escrituras, como son el tipo ó precio, la fianza provisional, los derechos y obligaciones que adquieran los rematantes y los que á su vez contraigan las Corporaciones interesadas, las multas por incumplimiento de los contratos, las responsabilidades por perjuicios, acciones y modo de proceder, á riesgo y cuenta de los rematantes, y la sumisión á los Tribunales del domicilio de las Corporaciones, con la obligación en los rematantes de pagar la escritura y derechos consiguientes. Estas son las indispensables y necesarias.

Pero, aparte de ellas, pueden acordarse y establecerse

todas las potestativas y voluntarias, todas las de garantía, todas las de concepto personal, pues son perfectamente legales.

La segunda afirmación de los tres señores Ingenieros es, que «no se opone la legislación de subastas á que en las condiciones administrativas aprobadas por los Ayuntamientos se exija alguna de carácter personal, como, por ejemplo, el título profesional y poseer tal ó cual capital». Y el Fiscal pregunta, sin ánimo de molestar á nadie y con todos los respetos, consideraciones y cortesías debidas: ¿no es verdad que esta conclusión se opone á lo establecido en la primera? ¿No es verdad que aquí se dice casi lo contrario de lo dicho antes? ¿No es verdad que aquí se confiesa que no se opone la legislación vigente á que, á las condiciones necesarias, se adicionen otras de garantía? ¿Pues »y aquéllo de que todo ciudadano que no ha perdido la »capacidad y tiene cédula personal puede acudir á las »licitaciones? ¿A qué ha venido á parar la afirmación anterior? Si se reconoce posible adicionar condiciones y se entra en el terreno de las apreciaciones y suposiciones, puesto que se emplea la frase *por ejemplo*, ¿se puede exigir el título profesional ó que se posea tal ó cual cantidad? Pues entonces, por este orden de consideraciones y aportillado el principio, el Ayuntamiento puede decir: «si tú opinas que tengo otros derechos, que puedo exigir que se tenga tal ó cual título, me reconoces la facultad de establecer condiciones voluntarias de garantía, independientemente de las necesarias que exige el Real decreto, como esenciales y substantivas del contrato.»

La tercera conclusión de los tres Sres. Ingenieros es que las condiciones personales, en casos excepcionales, han de ser apreciadas y justificadas, *antes de plantearse la competencia por medio de la subasta*, si se adopta este sistema de contratación, para que la competencia se pueda decidir única y exclusivamente por el precio ó tipo de la subasta.»

Como el Fiscal quiere hablar lo menos posible, ha de limitarse á leer al Tribunal media línea: «En la cláusula 4.^a se dice que las proposiciones han de formularse en *pliegos cerrados*»; y se añaden estas palabras: «Además, se habrán de acompañar á los pliegos (*á los pliegos cerrados*) los documentos justificativos...», etc.» En concepto de los tres señores Ingenieros, esta justificación de carácter personal, debía hacerse antes del acto de la subasta para que pudiese apreciarla la Mesa ó la Corporación respectiva; pero eso, como contrario á lo pactado, á la letra y al espíritu de la condición 4.^a, no puede aceptarse como buena doctrina á los efectos de la resultancia del proceso. De modo, que de las mismas conclusiones y palabras de los tres Sres. Ingenieros, se desprende ya, como inconcuso, á mi entender; como un dogma administrativo, que toda Corporación contratante puede, después de las necesarias, adicionar todo género de condiciones de otra índole que sirvan de garantía; y tanto es así, que el mismo Real decreto aludido, añade estas palabras: «Ateniéndose á lo que en cada caso y según la naturaleza del contrato dispongan las leyes.» (Artículo 2.^o del decreto del año 1883.)

Por consiguiente, es perfectamente lícito lo que hizo el Ayuntamiento, adicionando todas las condiciones que le parecieron oportunas, y especialmente las 4.^a y 6.^a que han sido objeto de este debate y que constituyen la base determinante de la existencia ó no existencia del delito que se persigue. Y recordará perfectamente la Sala que más de un testigo ha dicho aquí que no solamente consideraba legales y legítimas las bases 4.^a y 6.^a, sino que entendía, recogiendo impresiones de la discusión habida en la Corporación municipal, que la base 6.^a debía estar subordinada á la 4.^a, porque era precisa necesariamente la justificación documental de aptitud, antes de entrar en el tipo de número de años.

Otra afirmación consiste en que «la condición personal de justificación documental de aptitud sirvió para introducir en la subasta un elemento extraño». ¿Elemento extraño, señor, un elemento que recibió toda la publicidad posible, que se discutió, se votó y mereció la sanción de la Autoridad superior jerárquica, de la Autoridad gubernativa, oyendo á la Comisión provincial; que traspassó nuestras fronteras y se anunció en el extranjero con publicidad inusitada? ¿Puede llamarse á esto, técnicamente hablando, elemento extraño?

«El elemento extraño para la elección de la proposición habrá de apreciarse conjuntamente con el tipo ó precio.» — Pues claro. Después de haber sostenido otra doctrina, que no encaja ni armoniza con ésta, se reconoce en esta afirmación el principio de que, fuese extraño ó nó (extraño para los Sres. Ingenieros y no extraño para el Ministerio fiscal), esa condición había de ser examinada conjuntamente con todas las demás necesarias que eran objeto de la subasta.

Otra conclusión es, como suele decirse, el caballo de batalla del asunto.

Recordará perfectamente el Tribunal que, cuando dirigía ayer al Sr. D. Gabriel Rodríguez preguntas, rehuídas en gran parte, porque se encerró en las cuatro conclusiones formuladas por el Juzgado y no quiso entrar en ampliaciones de ningún género; recordará el Tribunal, digo, que lo saliente de su declaración fué el considerar que esas condiciones, 4.^a y 6.^a, especialmente la 4.^a, tenían un vicio de nulidad y que la subasta tenía en sus raíces y en su propio seno un elemento de nulidad que la hacía ineficaz. ¿Por qué? Pues dicen sencillamente en su informe los tres Sres. Ingenieros que el Real decreto de 1883 prescribe que ningún servicio pueda adjudicarse sino á una persona ó una entidad; y habiéndose adjudicado á dos ciudadanos, los señores Vanden-Eynde y Delooz, claro y evidente es que se había infringido el Real decreto, y, por consiguiente, era nula

radicalmente la adjudicación y no ha podido prosperar y marchar adelante, por más que se haya querido subsanar ese vicio con la aprobación del Sr. Gobernador civil.»

Y observará el Tribunal, porque no lo habrá olvidado seguramente, que esta teoría de los tres Sres. Ingenieros ha pasado á otros cerebros y ha sido recogida por otras inteligencias, puesto que el Sr. Marqués de Cabriñana, contestando anteayer á varias preguntas, repitió eso de que reputaba vicio de nulidad en la adjudicación de la subasta, el hecho de haberse adjudicado á dos personalidades, porque lo mancomún es incompatible con los derechos del Municipio, que se perjudican, toda vez que no se puede reclamar más que la mitad á cada uno de los obligados.

Y el Tribunal tendrá también presente que, como el señor Marqués de Cabriñana reúne la cualidad de Letrado, el Fiscal hubo de preguntarle si desde el momento en que dos personalidades se asocian para fines civiles de esta ó de la otra índole, para fines lícitos, no existe allí un germen y un pensamiento de Sociedad? Y tuvo que confesar que sí. Por consiguiente, desde el momento en que se adjudicó á Vanden y Delooz la subasta, ¿es verdad, volví á preguntarle, que ya constituían una personalidad jurídica ó una entidad jurídica? Y también tuvo que reconocer que sí, porque como Letrado no podía sostener lo contrario.

Pero, lo mismo el Sr. Marqués de Cabriñana que los tres Sres. Ingenieros, cuya ilustración tuvo el gusto de proclamar, poniendo á salvo toda su respetabilidad, han de permitir que el Fiscal discrepe del concepto que tienen formado de la mancomunidad.

El argumento de los Ingenieros es este: «Adjudicada á dos personalidades la subasta, se ha hecho mancomunada la obligación de estos licitadores, y como el efecto civil de toda mancomunidad es dividir la responsabilidad de los obligados, es claro que se ha perjudicado al Ayuntamiento, porque no puede pedir el todo á cada uno de esos dos individuos, los Sres. Vanden y Delooz.» Pero es que, sin duda, no habían leído, porque no puedo suponerlo de otro modo, el precepto terminante del art. 26 del Decreto de 4 de Enero de 1883, que dice textualmente: «Serán indivisibles para la Corporación las obligaciones y los derechos que del remate se deriven.» Esto, en castellano y en derecho, ¿qué significa? Pues significa que, por más que flote la palabra mancomún, cuando una Corporación adjudica á dos personalidades un servicio y mancomunadamente ellos se obligan á prestarle, el Decreto de 1883 da la garantía á la Corporación de excepcionarla de las consecuencias de los contratos civiles de mancomún. ¿Por qué? Porque son solidarias en virtud de este precepto especial.

La regla general, claro está, es que las obligaciones mancomunadas son exigibles por mitad: eso lo sabe el que cursa en primer año el Derecho romano y civil: la mancomunidad determina en el acreedor el derecho, y, por consiguiente, en los deudores el deber de repartir entre ellos la responsabilidad; pero, cuando se proclama el principio de que el derecho de la Corporación contratante es efectivamente indivisible, se convierte *ipso facto* por este precepto expreso la obligación mancomunada en obligación solidaria, única é indivisible. Lo mismo, pues, el Sr. Vanden-Eynde que el Sr. Delooz podrán ser demandados y perseguidos por la Corporación municipal para que cumplan cada uno de ellos la totalidad de las obligaciones contraídas en su contrato.

Esto, señor, no necesita más ampliación.

Otra afirmación es que los documentos presentados por el Sr. Presser son los únicos que responden de algún modo á la ilegal exigencia de la cláusula 4.^a

El Fiscal creía que los tres Sres. Ingenieros no llegarían hasta tal punto. Comprendo que éstos puedan, apreciando la documentación presentada, llegar hasta decir que la del Sr. Presser, que se reduce á una certificación de aprovechamientos, expedida por dos Ingenieros, es suficiente para acreditar la condición 4.^a, ó sea la aptitud para realizar el servicio. El Fiscal no tiene inconveniente ninguno en reconocer, con la lealtad acostumbrada, que efectivamente, este documento puede interpretarse de diversos modos; pero no puede admitir de ninguna manera que se llegue á decir que ese documento *es el único dentro del texto y espíritu de la condición 4.^a*, para que fuese preferido el Sr. Presser en la adjudicación de la subasta, porque la condición 4.^a exige también prueba documental de aptitud para la cremación por hornos. El Sr. Vanden-Eynde presentó dos testimonios de patentes de invención, patentes que estaban vivas el día en que debieron producir dentro del expediente sus efectos, y no importa que después hayan caducado con el lapso del tiempo, pues hay que retrotraer los efectos de las patentes al momento de la licitación de la subasta, y en aquel momento estaban vivas, y, por consiguiente, no afectan á los efectos jurídicos las consecuencias de esta observación que pudiera hacerse de que, andando el tiempo, han caducado las patentes concedidas.

Han presentado, pues, dos patentes: una para hornos de incineración, en la forma que expresa la Memoria adjunta que acompañaba, y otra de sistema de transformación en abonos, sin olor de las materias fecales, por los medios descritos en la Memoria que también acompañaron.

Pero yo pregunto; aún dado este supuesto, aún respetando la opinión radical de los tres Sres. Ingenieros respecto á que, efectivamente aquella certificación del Sr. Presser fuese la única, ¿esa condición 4.^a no reservaba la apreciación al Ayuntamiento, es decir, á la Corporación contratante que tenía interés directo en ello? ¿No es verdad que el derecho administrativo le otorga esa facultad de apreciar y ponderar los documentos justificativos de una y otra parte en la forma y manera que tenga por conveniente? ¿A qué quedaría reducida la esfera de acción adminis-

trativa, la iniciativa de las Corporaciones, si no tuvieran semejantes facultades?

Y se hace otra afirmación, que no dejará de llamar seriamente la atención del Tribunal. Se dice que la proposición de D. Saturnino Otaegui debió ser la preferida, con arreglo á la condición sexta.

De manera, señor, que hemos estado discutiendo en ese dictamen facultativo la lucha de intereses entre los señores Presser y Vanden-Eynde, y ahora resulta de esta conclusión que ni Vanden-Eynde, ni Presser, tenían preferencia ni razón ninguna, sino otro tercero, de quien nadie se habrá ocupado, el Sr. Otaegui. Y para que se vea cómo los hombres más competentes y más sabios incurren en lamentables contradicciones dentro de su competencia, se invoca la condición 6.^a

Pero, ¿es lícito á unos Ingenieros, que son llamados por la justicia humana para dar dictamen concreto sobre determinados puntos, descomponer las condiciones 4.^a y 6.^a, y porque así les plazca invocar la 6.^a, que antes habían negado, y con arreglo á ella decir que Presser debió ser preferido, callándose la condición 4.^a? No: hay que admitir la pertinencia de la 4.^a y la 6.^a en conjunto armónico, ponderarlas y examinarlas, ó no admitir ninguna de ellas. Salir ahora con esta conclusión de que la proposición de Otaegui debió ser la preferida con arreglo á la condición 6.^a, es tanto como decir que todas las demás no pueden encajar de modo alguno en la condición 4.^a, y esto, como se ve, es una manifiesta contradicción, sea dicho con todos los respetos.

Y concluyen que debió declararse sin efecto el acto de la subasta sin hacer adjudicación definitiva del remate, para repetir el acto con exclusión de la última parte de la cláusula 4.^a: «El Fiscal tiene que decir paladinamente que se separa por completo de semejante teoría administrativa, y lo hace así, porque el Consejo de Estado repetidamente tiene declarado que, tan pronto como se entrega por un licitador el pliego cerrado en manos del Presidente, queda perfeccionado el contrato y las obligaciones entre los contratantes, y, por consiguiente, se derivan derechos y obligaciones que no pueden ser modificadas sin manifiesta invasión de atribuciones por parte de la persona que presida la subasta.» No es posible; ni se pudo repetir, porque en la ley no está autorizado, porque el Ayuntamiento no había facultado al Presidente para que repitiera el acto, y el Presidente tenía facultades para dejar el hecho tan perfecto y acabado como si se hubiera firmado la escritura en casa del Notario. Por eso fué tan lejos el Decreto de 1852 á que antes me refería, que dijo: «Contra el remate de esta manera solemnizado, no cabe más recurso que el de nulidad, oyendo al antiguo Consejo Real»: tan lejos llevaba aquel respeto profundo al contrato que se celebraba en el momento que se presentaba la proposición. No de otra manera se puede vivir al amparo de un acto público, en que se realizan convenios ó contrataciones con la Administración pública. Aquí sí que se necesita que el licitador, frente á frente de la Administración, siempre poderosa, y algunas veces absorbente, tenga todas las garantías, escritas en Reales órdenes, Reales decretos y leyes.

Última afirmación de los Sres. Ingenieros: que la cláusula 4.^a dificulta la concurrencia de licitadores.

Para contestar á esto, me referiré al dictamen de la Comisión provincial, emitiendo opinión acerca de esta materia. Allí se afirma que no existe semejante limitación; que sólo se exigía la cremación por hornos y el uso de la creolina ú otros agentes químicos de gran potencia; que han podido acudir sin restricción alguna todos los autores de hornos habidos y por haber, si les hubiera así convenido; y que se puso en conocimiento de los Cónsules de Bruselas, Amberes, Berlín, Francfort, Londres y Lisboa, para dar á este asunto una publicidad casi inusitada y provocar precisamente la concurrencia que creen los Ingenieros que se impedía ó dificultaba á consecuencia de la cláusula 4.^a Este es el documento á que antes me refería.

Finalmente, concluyeron su informe, asegurando que de los cuatro postores no presentaron documento alguno justificativo de aptitud más que dos, y, por consiguiente, sólo éstos estaban en condiciones de que pudiera serles adjudicado el servicio.

Estas son las discordancias, estos son los escrúpulos, los reparos y las reservas que entendía el Ministerio Fiscal tenía necesidad de dejar en público consignados.

Ese dictamen es de pura apreciación; ese dictamen podría ser un factor, un dato, un elemento, pero un elemento coadyuvante de otros elementos, coexistiendo y combinándose con ellos, para formar en el fondo de la conciencia honrada el convencimiento de la criminalidad de los procesados. Pero si ese dato contiene, á mi entender, con los respetos debidos, grandísimos errores de concepto, contradicciones evidentes, teoría que no están dentro del Decreto de 1883, invasión de la facultad discrecional de la apreciación del Ayuntamiento, administrativamente hablando, no extrañará á nadie que el Fiscal tome otros rumbos, tenga otros puntos de vista y considere que efectivamente las condiciones 4.^a y 6.^a han sido de perfecta legalidad para el acto de la subasta y han sido discutidas de buena fe, votadas por todos y sancionadas por el superior jerárquico, según queda demostrado.

No habiendo infracción ninguna de preceptos legales positivos, no es posible, sin cambiar de plano todos los principios fundamentales del derecho administrativo, aceptar otras teorías distintas de las que brevemente ha tenido el honor de exponer el Ministerio Fiscal.

En tal situación, ¿era posible que el Ministerio Fiscal acusara con este solo elemento? ¿Es posible que un dictamen de esa clase, que no es más que un dato de aprecia-

ción para el Tribunal sentenciador, se vaya á convertir en un dogma indiscutible, con lo cual sería innecesaria la existencia del Tribunal? ¿Ha de ser esa la última palabra? ¿Ha de ser ese el fallo sobre las cuestiones aquí controvertidas, saliéndose del molde de los conocimientos técnicos los Ingenieros, rebasando la línea y viniendo á discutir derecho administrativo ó derecho civil? Esto no es posible, al menos según la conciencia del Fiscal. Desde fines del siglo pasado estamos discutiendo la independencia de las dos ramas del poder ejecutivo; desde fines del siglo pasado estamos esforzándonos todos en deslindar hasta dónde llega la acción administrativa y dónde comienza la acción judicial: ¿es posible que después de esto, cuando todavía no ha dicho la ciencia la última palabra, ni la dirá seguramente en mucho tiempo, porque no hemos pasado del proyecto de cierto Código de Administración civil, venga un poder á invadir la esfera peculiar y propia del otro y viceversa?

Esto no es posible ni es tolerable.

El art. 20 del decreto de 1883 determina que la votación que recayera en un Ayuntamiento con motivo de la adjudicación de un servicio público, tiene el carácter de firme y ejecutoria, sin que quepa contra ella más recurso que la demanda de daños y perjuicios. Si es ejecutorio, si están cerradas ya las puertas de la discusión, si efectivamente la verdad legal es la votación del Ayuntamiento, ¿concibe la razón que sea posible que después de eso arranque su conocimiento el Tribunal ordinario de justicia y eleve ese hecho sancionado y pasado en autoridad de cosa juzgada á la categoría de delito de prevaricación? ¿Dónde está esa demanda intentada de daños y perjuicios? Si los interesados no se han atrevido á formularla, y eso que era fácil, porque no necesitaban más que demostrar la mala fe de los Concejales, si no han tenido atrevimiento para demostrarlo, ¿se quiere que venga el Tribunal, ó el Fiscal al menos, y esa mala fe que no se han atrevido á demostrar, y la eleve á la categoría de delito de prevaricación? Son distintas esferas, son campos muy diversos y es preciso ir con todo el acierto y el aplomo debidos en esta materia, por aquello que he dicho al principio, para que el prestigio del ministerio Fiscal se mantenga á la altura á que debe conservarse.

Había recursos que utilizar y no se han utilizado; se han entablado algunos perfectamente tramitados y después denegados; quedaba todavía el recurso de una demanda contencioso-administrativa, y tampoco se ha formulado; por consiguiente, queda en pie el dogma: la verdad legal de que efectivamente las condiciones 4.^a y 6.^a revisten todos los caracteres de legalidad bajo el aspecto administrativo.

¿Quién de nosotros ignora que el Consejo de Estado ha dicho repetidamente que de toda clase de incidentes que se relacionen con las subastas no puede conocer la autoridad judicial, sino que son de la competencia exclusiva de la Administración? ¿Quién de nosotros ignora que en todo lo que se refiere á inteligencia, alcance, interpretación de las cláusulas de contratos administrativos, cuando de servicios públicos se trata, tiene exclusiva competencia la administración activa en sus diversas gerarquías?

Y si esto es cierto, véase el abismo insondable que existe entre este precepto y la teoría que se quería aquí invocar de que esto revistiera los caracteres de delito.

Más digo: una teoría ha lanzado la digna defensa del Sr. López Martínez, que es preciso reconocer tiene gran fundamento. Ha invocado el siguiente principio:

Según doctrina del Consejo de Estado, siempre y cuando un Gobernador apruebe en absoluto un acto cualquiera administrativo de un Alcalde, determina la irresponsabilidad del mismo y lo pone completamente á cubierto de toda acción que en este sentido se dirija. Tiene razón; el mismo señor López Martínez ayer lo repetía erguido, valiente, como es valiente un hombre tan honrado como el Sr. López Martínez, diciéndonos: yo he ido al Ayuntamiento de buena fe; yo he discutido de buena fe; he recogido todas las indicaciones de mis compañeros que me inspiraban confianza; he votado con la mano puesta sobre mi conciencia, y, por consiguiente, entiendo que soy irresponsable, porque de mi votación hubo recurso de alzada y ha venido el superior gerárquico que lo ha confirmado y me ha dicho: «has votado bien»; yo no tengo responsabilidad.

El Fiscal no puede menos de manifestar aquí el respeto y la consideración que el Sr. López Martínez le inspira. Tan cierto es esto, que ni siquiera ha venido la excitación que la Sala sabe que existe en el art. 13 del Reglamento sobre procedimientos administrativos de 15 de Abril de 1890; ni siquiera eso, para que la autoridad judicial conozca y penetre de algún modo en la esfera administrativa para estimar los hechos calificados de ilegales. «Si se decretara una resolución manifestamente injusta á sabiendas, se pasará el tanto de culpa á los Tribunales, conforme al artículo 369 del Código penal». La autoridad superior de ese Ayuntamiento ha conocido de las alzas, ha tenido conocimiento perfecto de los hechos, ha examinado y leído las condiciones 4.^a y 6.^a, ha visto la discusión habida y las impugnaciones realizadas, y sabía perfectamente de qué se trataba y lo que debía confirmar y revocar, y ninguna auto-

ridad superior ha pensado jamás en pasar el tanto de culpa, lo cual demuestra que no ha habido error ni responsabilidad en el Ayuntamiento por los actos realizados. Yo entiendo que con esto basta. ¿A qué he de penetrar yo en el verdadero abismo de este proceso, donde hay tantos cabos sueltos? ¿Para qué? Entiendo que el tono general lo he dado; entiendo que he puesto ya los contornos para formar idea y para explicar cuál es el criterio y los fundamentos que han determinado en mi ánimo para retirar la acusación. Por consiguiente, cuatro palabras más y concluyo.

Trataré, señores, de demostrar si en vista de todos los antecedentes, si esto de que hemos hablado, todo recogido, todo armonizado y todo compacto, puede constituir elemento suficientemente probado del cual fluya y surja el delito de prevaricación. La prevaricación es un delito especial, que tiene título aparte, y que no se pena por aquella doctrina de que sea acto ú omisión voluntaria penada por la ley. Exige algo más que eso la ley, porque si no, con haber escrito el art. 1.^o, no había necesidad de más. El delito de prevaricación necesita dos elementos substanciales para que se constituya: cometer una injusticia á sabiendas de que se comete, ó cometer y realizar esa injusticia en fallo ó en providencia administrativa que tenga carácter de final, no de interlocutorio, que se haga el daño y la injusticia con ignorancia inexcusable.

He aquí los dos extremos. ¿Existe aquí ignorancia inexcusable? Tenemos la suerte de que lo ha definido el art. 262 de la ley orgánica, que dice:

«Se tendrán por inexcusables la negligencia ó la ignorancia, cuando, aunque sin intención, se hubiese dictado providencia manifestamente contraria á la ley, ó se hubiera faltado á algún trámite ó solemnidad, mandado observar por la misma, bajo pena de nulidad.» ¿Es posible, me preguntaba yo, que haya ignorancia inexcusable sino, por el contrario, ignorancia, aunque ésta existiera, que el Fiscal no la admite, ignorancia perfectamente excusable, desde el momento en que el Gobernador ha aprobado lo votado por el Ayuntamiento? Si la Autoridad superior sanciona y aprueba; si la respetabilidad de una Audiencia confirma la sentencia de un Juez; si un Gobernador, oyendo á la Comisión provincial, aprueba lo hecho por una Municipalidad, ¿es posible que dentro de este molde y con estos hechos se atreva nadie á sostener que aquí puede existir ignorancia inexcusable? No; de ningún modo. Es excusable perfectamente, aunque hubiera podido cometerse ignorancia, porque el superior la ha aprobado. Por consiguiente, el Fiscal, bajo este punto de vista, no puede apreciar la existencia de ignorancia inexcusable. ¿Pero ha existido manifiesta injusticia en el hecho realizado persiguiendo un ideal, teniendo un favorecido?

Yo no necesito invocar más que dos sentencias, que han sentado jurisprudencia: la de 22 de Julio de 1890 y la de 19 de Febrero de 1894. En esta última se proclama esta doctrina: «Error inexcusable sólo existe cuando implica una injusticia manifiesta, es decir, una injusticia de aquellas que no pueden explicarse por una interpretación razonable, siquiera sea equivocada del juicio de la ley que se aplica, sino que, por el contrario, resulte por modo claro é indiscutible, lógicamente, la notoria violación de un precepto legal.»

El Fiscal que ha alegado, que ha expuesto los hechos á su entender, con matemática precisión y con exactitud, se dirige las siguientes preguntas: ¿Dónde está, quién ha comprobado hasta la fecha y quién ha determinado la violación concreta de un precepto legal en el caso presente?

El Ministerio fiscal declara que no lo ha oído, y estamos ya en las postrimerías del juicio; si lo hubiera oído, el Ministerio fiscal combatiría ese concepto y discutiría bajo ese aspecto la cuestión, como ha tenido el honor de discutir frente á frente el dictamen de los Sres. Ingenieros.

Para complemento, tengo que invocar dos precedentes, porque este organismo, ya viejo; porque esta función, que tiene tanta responsabilidad; porque el Cuerpo fiscal, en una palabra, no puede traer novedades jurídicas á cada paso, es preciso que se inspire también en los precedentes, en los hechos consumados, que se ilustre con las sentencias de los Magistrados; y yo tengo que invocar, señor, porque voy en buena compañía, que toda esta doctrina mencionada por mí en el día de hoy tiene ya su sanción antigua por algunas sentencias de esta Audiencia en casos análogos. No haré más que indicarlas.

Por Real orden de 27 de Noviembre de 1884, practicó el Director general de Administración local, Sr. Corbalán, por delegación especial del Gobierno, la inspección de la gestión administrativa del Ayuntamiento. En la Memoria que redactó el Sr. Corbalán se denunciaban varios abusos, y después de aprobada por el Gobierno y pasada al Consejo de Estado, se dictó la Real orden de 13 de Mayo, que ordenaba la remisión del expediente á los Tribunales de Justicia. Callo todo lo que allí resultaba, porque no es del caso; pero en auto de 22 de Diciembre de 1885, la Sala de justicia de esta Audiencia proclamaba la siguiente doctrina: «Cualesquiera que asen las omisiones, negligencias, abusos é irregularidades que los actos del Ayuntamiento parecen determinar, hay que tener presente que la misión de los

Tribunales es la de apreciar si tales omisiones de hechos constituyen desde luego delito previsto y objeto de sanción penal en el Código, ó una desacertada gestión económica que afecte á los intereses municipales, y que deba quedar sometida á la inspección superior jerárquica del orden á que corresponda». He aquí la doctrina proclamada por la Sala; he aquí la doctrina substancialmente invocada y sostenida como buena y corriente entre los Jurisconsultos por el Fiscal de S. M. en el acto del día de hoy.

Hay otro precedente. El Gobernador de Madrid, por Real orden de 31 de Marzo de 1889, giró una visita á los servicios de la Administración municipal; el Gobierno instruyó expediente; fué oído el Consejo de Estado, y por Real orden de 27 de Septiembre se suspendió á los Concejales, como en el caso anterior, y se mandó remitir los antecedentes á los Tribunales ordinarios en lo relativo á los consumos, fieltos, tránsitos fraudulentos, obras, expropiaciones, cesiones y abusos análogos. Doctrina que estableció el auto de 1890: «Considerando que, si bien de las diligencias practicadas aparece la existencia de varias infracciones reglamentarias que pudieran dar origen á responsabilidades exigibles en el orden administrativo, no ha resultado debidamente justificada la perpetración de delitos que dieran motivo á la formación de causa, se sobresee», etc.

He aquí, señor, cuanto el Fiscal considera pertinente y necesario para la verdadera ilustración de los hechos, para satisfacción cumplida de la opinión, por propia dignidad y por propio honor suyo, por altísimos respetos al cuerpo electoral, y al Municipio, y al Tribunal que me está escuchando, y necesario y pertinente también para defender mi actitud en el día de hoy, al retirar la acusación formulada. El Fiscal ¿ha obrado bien? ¿Ha acertado con la fórmula? ¿Debiera haber callado ó ha hecho bien en hablar? Hoy, que tanta publicidad se quiere; hoy, que nuestras instituciones de la publicidad viven, porque lo mismo la institución del Jurado que la del juicio oral y público están inspiradas en la idea de la publicidad, me parece que lo menos que puede permitírsele al Ministerio fiscal es, que ya que no puede descender á la polémica diaria, cuando llegue un momento como éste, se le conceda la libertad y la publicidad que los demás reivindicán para sí, es decir, la libertad de defender sus actos y razonar sus conclusiones, ya que esto á ningún ser inteligente se le ha negado hasta ahora. De todos modos, señor, el Ministerio fiscal no viene aquí jamás á recoger glorias, porque siendo su misión, por lo general, acusadora, no recoge más que amarguras.

No sé si habré acertado ó no; lo que sí sé es que he estudiado el proceso y que me he inspirado en doctrinas de mis superiores jerárquicos. El Fiscal del Supremo ha dado una circular en la que dice estas palabras:

«Porque si los rumores, de origen por lo común desconocido y siempre sospechoso, ó las acusaciones vagas de la opinión, hubieren de servir como medios eficaces para el ejercicio de la acción fiscal y como elementos de convicción para dictar sentencias condenatorias, el terror reemplazaría á la confianza pública, la ley sería hipócritamente invocada para que sirviera de escudo á toda mala pasión y los Tribunales de justicia, hoy garantía del derecho, quedarían convertidos en despreciables instrumentos de la más repugnante y odiosa de las tiranías.»

He aquí lo que ha inspirado al Ministerio público para realizar el acto que he tenido el honor de llevar á cabo en el día de hoy. He dicho.

El Sr. Díaz Cobeña: Pido la palabra para hacer una breve y sencilla manifestación, si la Sala me lo permite.

El Sr. Presidente: El Sr. Letrado tiene la palabra.

El Sr. Díaz Cobeña: Al anuncio que hizo el Sr. Fiscal de que retiraba la acusación de los procesados, que llevan muchos meses bajo el peso de la misma, creían que, limitándose el Sr. Fiscal á retirarla, no podían menos de solicitar de la benevolencia de la Sala, siquiera se saliesen un poco del principio que informa la ley procesal, aunque no se opone á sus prescripciones terminantes, que se les permitiera en este acto solemne y público contestar á ciertas especies y desvanecer ciertas nieblas que sobre su honra pudieran quedar, concluyendo esta causa de la manera que concluía. En tal concepto, estas defensas me habían encomendado la misión de que solicitara de la Sala el permiso para hablar; pero después de haber oído el elocuente informe del Fiscal, en el que, para razonar su actitud y expresar los fundamentos de la retirada de la acusación, no sólo ha destruido todo fundamento de ésta, sino que ha demostrado que no ha existido nunca, ni en la denuncia ni en los demás datos aportados, nada que pudiera pesar sobre la honra y el buen nombre de los procesados, creemos las defensas que, si añadiéramos una sola palabra, no sólo abusaríamos de la benevolencia de la Sala, sino que hasta debilitaríamos la poderosa y elocuente argumentación con que el Sr. Fiscal ha venido á demostrar que aquí no existe materia de delincuencia ni de proceso.

Esta era la manifestación que quería hacer para explicar la conducta de esta defensa en un proceso tan grave y de circunstancias tan accidentadas.

El Sr. Presidente: Concluso el juicio para sentencia.

